

Gomez Almanza, por no haberse efectuado violacion de las garantías constitucionales que invoca.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M<sup>a</sup> Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Guanajuato por el C. Roman Mendoza, que cree ha habido violacion de garantías con la providencia dictada por la diputacion de minería del Estado, que declara desiertas, sin audiencia del quejoso, tres barras sesenta y nueve centésimos de que este se dice dueño en la Mina "San Antonio de la Ovejera."*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

O. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Roman Mendoza solicita que la justicia federal lo ampare contra una disposicion de la diputacion de minería, que ha declarado desiertas las acciones que tenia el quejoso sobre tres barras sesenta y nueve centésimos de la mina llamada San Antonio de la Ovejera.

El peticionario pretende que semejante acto ejercido por la diputacion de minería infringe en su perjuicio las garantías que la Constitucion general de la República consigna en sus artículos 4º, 13 y 27.

Evacuado el informe que en su auto de 12 del actual pidió ese juzgado á la diputacion de minería, esta corporacion ha manifestado: que D. Fernando Gonzalez en propia representacion y en la de los demas parcioneros de la mina de S. Antonio solicitó que se requiriese, entre otros individuos á D. Roman Mendoza para que pague lo que estaba adeudando por las acciones que representaba, y que de no hacerlo se declarasen desiertos sus derechos, conforme con la prevencion expresa de las ordenanzas del ramo art. 8º tít. 11.

Ausente como estaba de la capital del Estado D. Roman Mendoza, la diputacion de minería mandó publicar sus pregones dándole á Mendoza el plazo de quince días para que pagase ó se presentara á deducir sus derechos; no concurrió, y pasado el término, á peticion de Fernandez proveyó la diputacion su auto de 27 de Febrero de 1867, declarando desiertas las acciones de Mendoza.

Héchose cargo este ministerio fiscal, de las razones contenidas en el escrito del solicitante así como del informe de que he hecho mérito, encuentra que no ha habido infraccion de ninguna de las garantías que invoca el C. Mendoza.

Este ministerio fiscal considera las ordenanzas de Minería, si bien como una ley sancionada por el soberano, tambien como un reglamento ó condiciones á que tienen que sujetarse los que contratan ó se asocian para la explotacion de las minas. El art. 8º tít. 11 de las mismas ordenanzas es muy expreso en determinar, que todo minero que dejare de pagar lo que le corresponde en el término de cuatro meses continuos, pierde su derecho, es decir; que debe declararse desierta su accion, la que debe acrecer á los demas parcioneros sin

necesidad de nuevo denunció; estas como se ha dicho son condiciones á que se sujetan los mineros y que deben tenerse como un contrato que suscriben tácitamente desde el momento en que se asocian para el laboreo de las minas.

La diputación de minería fundándose en una disposición tan terminante, acordó en uso de sus facultades puramente gubernativas, la desercion de las acciones del C. Mendoza, cuya falta al pago se le acreditó suficientemente.

El promotor conviene con el quejoso que conforme al art. 13 de nuestro pacto federal, ninguno puede ser juzgado ni sentenciado por tribunales especiales; pero no es este el caso, porque la diputación no ha dado una sentencia; toda sentencia supone juicio previo, y en el caso presente no ha habido juicio. El promotor tiene tan cierto que las disposiciones dictadas por la diputación de minería no tienen el carácter de sentencias, cuando que en manera alguna enervan los derechos de los que se creen agraviados, pudiéndolos deducir ante la justicia ordinaria de la que obtendrían fácilmente la reparación de sus agravios.

Reasumiendo los hechos se ve claramente, que la diputación de minería no ha pronunciado una sentencia judicial, sino que ha dado una resolución gubernativa en uso de sus legítimas facultades, y también aparece que esta corporación no ha infringido en perjuicio del C. Mendoza las garantías otorgadas por la Constitución en sus artículos 4º y 27, porque los derechos que allí se consignan los había perdido este en la mina de la Ovejera. La repetida diputación no ha hecho en fin, mas que hacer una declaración á este respecto, cuya declaración no surtirá mas efecto que los que le otorga la ley.

Por las razones que quedan expuestas, y en el supuesto de que sean ciertos y probados los hechos que la autoridad que motiva la queja refiere en su informe, este ministerio fiscal pide al juzgado se sirva declarar:

Primero; que la justicia de la Unión no ampara al C. Roman Mendoza contra la disposición de que se queja, dictada por la diputación de minería, porque no se infringen con ella las garantías que invoca el quejoso.

Segundo; que ha incurrido en la multa de que habla el art. 16, capítulo 4º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Guanajuato, Agosto veintidos de mil ochocientos setenta y uno.—Zenon J. de Velasco.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guanajuato, veintisiete de Setiembre de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Ramon Mendoza contra la diputación de minería del Estado, con motivo de la providencia que dicha corporación tuvo á bien dictar en 27 de Febrero de 1867, declarando desiertas, sin audiencia del quejoso tres barras y setenta y nueve centésimos, de que este se dice dueño en la mina de San Antonio de la Ovejera, con cuya declaración erce el mismo interesado violadas en su perjuicio las garantías que reconocen y sancionan los artículos 4º, 13 y 27 del código fundamental de la República; y

Considerando: que el peticionario ha sido privado de su propiedad, sin forma de juicio y por una autoridad que carece de facultades contenciosas, supuesto que por el art. 13 de la Constitución están abolidos los tribunales especiales, y en tal virtud, toda cuestión que afecta á los intereses de particulares es de la exclusiva competencia de los jueces ordinarios, sin que deba ingerirse en resolverla autoridad alguna del órden administrativo.

Considerando: que la expresada diputación de minería no está autorizada ni por el art. 8º, tit. 11 de las ordenanzas del ramo, ni por el decreto del Estado de 6 de

Encero de 1858, para entender en la sustanciacion y determinacion de negocios del Orden judicial, y que aun en el caso de que esas prescripciones legales ó cualesquiera otras la invirtieran con semejante atribucion, no deberian ser acatadas por pugnar abiertamente contra el tenor del art. 13 citado, y por ser el pacto federal la suprema ley de la Nacion, á la cual tienen el deber de sujetarse las autoridades á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes de los Estados.

Considerando: que la corporacion de que se trata, habiendo procedido sin facultades legítimas al declarar desiertas las acciones que representa el quejoso en la mina de San Antonio de la Ovejera, no solo atentó contra lo dispuesto en el art. 13 de que se ha hecho mencion, sino tambien contra el 4º y 27 del mismo código, porque impidió al C. Roman Mendoza aprovecharse de los productos de una industria honesta y útil y porque ocupó su propiedad en beneficio de personas extrañas, y no por causa de utilidad pública, ni previa la competente indemnizacion; por estas razones, el C. juez de Distrito definitivamente fallando, declara: que la justicia de la Union ampara y protege al C. Roman Mendoza contra el auto que pronunció la diputacion de minería del Estado en 27 de Febrero de 1867, declarando desiertas, sin audiencia del interesado, tres barras y setenta y nueve centésimos de barra, que este dice tener en la mina de San Antonio de la Ovejera.

Notifíquese este fallo á las partes, remítase copia de él á la redaccion del periódico oficial del Estado, para su publicacion, y hágase otro tanto con los autos á la Suprema Corte de Justicia de la nacion para los efectos legales.

Así el C. juez de Distrito, juzgando en definitiva, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre doce de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Guanajuato por el C. Roman Mendoza, contra la determinacion de la diputacion de minería de ese Estado, de 27 de Febrero de 1867, declarando desiertas tres barras y setenta y nueve centésimos, pertenecientes al quejoso en la mina de San Antonio de Ovejera, alegando que dicha declaracion viola las garantías consignadas en los artículos 4º 13 y 27, de la carta federal de la República. Vistas las constancias de autos, y

Considerando: que la diputacion de minería del Estado de Guanajuato hizo la declaracion que ha motivado el presente recurso, en uso de sus facultades administrativas, sin que dicha declaracion tenga carácter alguno judicial.

Considerando: que el quejoso tiene todos sus derechos á salvo para hacerlos valer en la vía y forma prescrita por las leyes, sin que la declaracion repetida importe violacion alguna de las garantías consignadas por el quejoso en su escrito de demanda; con tales fundamentos se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Guanajuato que concedió el amparo al quejoso, y se decreta: que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. Roman Mendoza contra la declaracion de 27 de Febrero de 1867, hecha por la diputacion de minería de ese Estado, en virtud de sus facultades administrativas, por no haber garantía violada.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que for-

maron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Tabasco, por el C. Trinidad Flores, contra una providencia del ejecutivo del Estado que despoja al quejoso de una prensa de su propiedad.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El gefe de hacienda representando la voz fiscal, dice: En el escrito que obra por cabeza de estas actuaciones, el C. Trinidad Flores, promueve juicio de amparo contra el C. gobernador del Estado, en reclamacion de una imprenta que de su propiedad existe en poder del C. José María Abalos.

El quejoso, sabedor de que el C. gobernador habia dispuesto la entrega de la imprenta, solicitó la suspension inmediata de esa disposicion, á lo que ese juzgado tuvo á bien acceder; dictando su auto de fecha diez del pasado, mandando á la vez la continuacion de estos procedimientos conforme al art. 9 de la ley de 20 de Enero de 1869.

La autoridad contra quien se entabla el amparo al producir su informe sin justificante como debió hacerlo, expresa que su antecesor, revestido de facultades extraordinarias en el año de 1864, hizo pasar al

Estado para su uso el dominio de la imprenta reclamada, como perteneciente á un individuo culpable de infidencia á la patria, trayendo á colacion la excepcion señalada al final del art. 8º de la ley de amnistia de 14 de Octubre último, y que si lo primero no merece acatamiento, ni lo segundo se tiene en cuenta, cesa de representar por su parte propiedad á la cosa que se cuestiona.

Verdaderamente, el C. gobernador cesa de cuestionar en este asunto, no de una manera expresa sino condicional; pero una vez que la propia ley de amnistia ha dispuesto la entrega á sus verdaderos dueños de los intereses que no se hubiesen enagenado, conforme á la ley de 16 de Agosto de 1863, no existiendo constancia de que la imprenta en cuestion se hubiese trasladado su dominio con las ritualidades señaladas en la anterior ley citada, segun se demuestra al calce del ocurso de fojas dos, esta fiscalia opina porque se ampare al querellante, entregándosele la referida imprenta en el estado en que se encuentra, pues de lo contrario se violará una de las garantías que acuerda la Constitucion nacional, cual es la propiedad. Esto es, salvo lo que ese juzgado tenga por mas conveniente determinar.

San Juan Bautista, Julio diez de mil ochocientos setenta y uno.

Por ocupacion del C. gefe de hacienda.—*M. M. Moreno*, oficial.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

República mexicana, juzgado de Distrito de Tabasco.

San Juan Bautista, Setiembre dos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio á que dió origen el ocurso presentado á este tribunal en 9 de Junio del corriente año por el C. Trinidad Flores en demanda de amparo contra una providencia del ejecutivo del Estado, segui-